

SUICIDIO ECONÓMICO

Tal Cual, jueves 10 de junio 2010

Econ. Isaac Mencía

En mi artículo del martes 23 de febrero de 2010 titulado “Socialismo Autodestructivo”, expuse la tesis de que los gobiernos populistas y socialistas tienen una alta vocación autodestructiva que nace del empeño obsesivo en ejecutar modelos y políticas económicas probadamente incoherentes e inviables, las cuales producen desequilibrios y distorsiones económicas que tarde o temprano terminan desatando crisis severas y colapso económico, cuyo costo recae con mayor fuerza en los sectores sociales más pobres que dicen defender y en nombre de los cuales se justificó dichas políticas.

El “Socialismo del S. XXI” es un buen ejemplo de esa vocación autodestructiva que comporta una especie de “suicidio económico”. Ningún régimen político-económico puede perpetuarse en el poder destruyendo las bases económicas, sociales e institucionales de la sociedad sin construir unas nuevas bases más sólidas que proporcionen mayor bienestar y justicia a las personas y sus familias.

Lo que viene aconteciendo en Venezuela en estos once años de “revolución bolivariana” devenida en socialismo, evidencia una elevada y continua vocación para destruir, sólo comparable con la escandalosa ineptitud para construir que exhiben día a día los promotores del socialismo. En estos años ha ocurrido una verdadera devastación económica, encubierta en buena medida, por la bonanza de ingresos petroleros percibidos principalmente en el período 2004-2008. Pero ya en el 2009 la crisis se hizo ostensible con un cuadro de estanflación, y en 2010 se está profundizando como lo muestra la caída del PIB en 5,8% en el primer trimestre.

El suicidio económico comenzó con la destrucción de PDVSA al despedir más de 20.000 trabajadores que constituían el capital más valioso de esta empresa. Esta decisión debilitó sensiblemente la capacidad operativa, gerencial y financiera de PDVSA, al punto que después de 8 años de los despidos aún no se ha podido recuperar la capacidad de producción y exportación de petróleo, la empresa se encuentra altamente endeuda, y su misión ha sido desvirtuada al asignarle funciones y objetivos que nada tienen que ver con el negocio petrolero. PDVSA es la única empresa petrolera en el mundo que vende alimentos subsidiados, construye casas, y financia una diversidad de actividades ajenas al petróleo. En pocas palabras, la “gallina de los huevos de oro” ha venido siendo degollada poniendo en serio peligro la principal fuente de riqueza de Venezuela.

A este suicidio económico le siguió la ejecución de una política económica insostenible centrada en dos ejes: el primero, basar el crecimiento en una política de gasto público expansivo para aumentar el consumo, menospreciando la inversión privada nacional y extranjera como motor de creación de riqueza, así como el impacto negativo de dicha política sobre la inflación; y el segundo, un sistema de control de precios y de cambio, provocando escasez y una fuerte apreciación del bolívar frente al dólar lo que estimuló una avalancha de importaciones convirtiendo a Venezuela en una “economía de puerto”. El resultado de esta política ha sido quiebra de empresas en el sector manufacturero, destrucción de empleos productivos, caída de la producción

agropecuaria en rubros muy importantes como carne, leche, arroz, café y azúcar, entre otros, alta y persistente inflación y escasez de productos, fuga creciente de divisas debido a desconfianza económica y política, y baja inversión nacional y extranjera por falta de incentivos, entre otros daños importantes.

Estos pésimos resultados han sido potenciados con una política de confiscación y expropiación de tierras productivas y empresas, en una abierta violación de los derechos humanos de propiedad y libertad económica, profundizando la destrucción del aparato productivo y del empleo y, consiguientemente, la creación de riqueza. Hoy tenemos un Estado más hipertrofiado y despilfarrador, lleno de tierras y empresas que no saben ni pueden gerenciar con eficacia y eficiencia. La destrucción de las empresas de Guayana, la crisis eléctrica nacional, y el reciente escándalo por la podredumbre de miles de toneladas de alimentos importadas por PDVAL, es un claro ejemplo, y el país está pagando un alto costo.

El suicidio económico ha estado acompañado de un debilitamiento de las instituciones que por ley deben ocuparse de la política económica. La mayoría de ellas han sido convertidas en centros de clientelismo político donde la meritocracia ha sido reemplazada por la lealtad incondicional al régimen. De allí la piratería y la improvisación que se observa en el manejo de la economía.

En el caso del BCV, si bien mantiene un calificado equipo técnico de economistas y estadísticos, su autonomía y misión institucional ha sido violentada convirtiendo al instituto en financista directo de los déficit del gobierno, dejando con ello al país sin una institución que se ocupe de velar por la estabilidad de precios, del valor interno y externo del bolívar, y de una sana administración de las reservas internacionales.

Cuando un gobierno comete un suicidio económico no sólo fracasa políticamente, sino que lo más grave es que condena a la pobreza al mismo pueblo que ha jurado defender. Construir un nuevo rumbo económico e institucional es el desafío de la hora presente.